

Protección social para las personas trabajadoras en empleo informal: cambios y tendencias

El registro: conceptos, enfoques y estrategias claves para incluir a las personas trabajadoras en empleo informal

Introducción

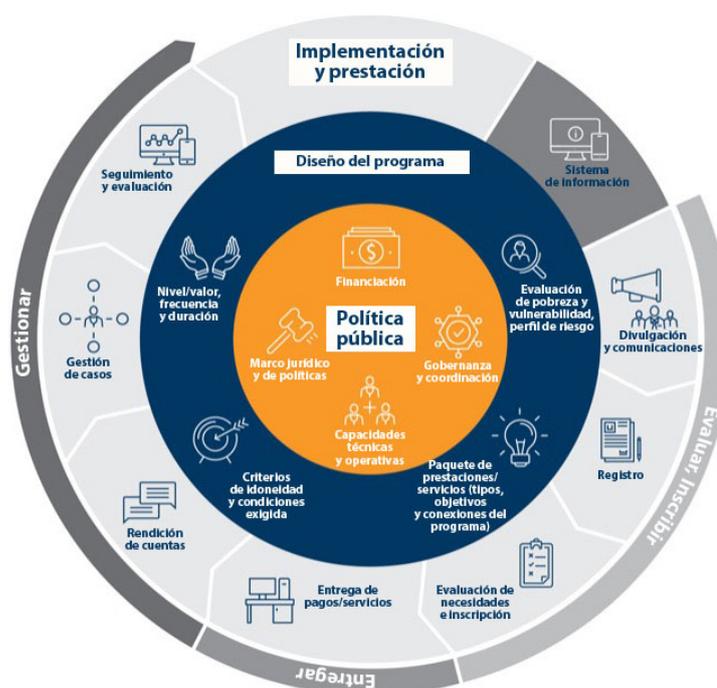
En esta nota, revisamos los debates actuales sobre las estrategias, los desafíos y las oportunidades del proceso de registro en el marco de la protección social. En la primera parte, presentamos los conceptos, enfoques y debates claves sobre el registro de las personas trabajadoras y su inserción en el sistema global de la protección social. La segunda sección pone de relieve las estrategias básicas de registro, incluidas las actividades de acercamiento y sensibilización. Examinamos los censos en masa, bajo demanda y otros métodos que hacen uso de los datos existentes. Después, nos movemos hacia enfoques innovadores de registro, donde revisamos los desafíos y las oportunidades de la digitalización y los aprendizajes que dejaron las respuestas digitales durante la crisis de la COVID-19. Terminamos explorando los retos a los que se enfrentan las personas trabajadoras en empleo informal para estar incluidas en los sistemas de registro y en las diversas políticas instrumentadas específicamente para registrarlas.

El registro: conceptos y debates claves

El registro es un componente esencial de cualquier sistema de protección social. Se trata del primer paso para que un sistema de protección social identifique a individuos y familias, lo que permite saber quiénes son las posibles personas beneficiarias, cuántas son, dónde están, etc. Se compone generalmente de procesos múltiples: propiciar el primer contacto, captar a las posibles personas beneficiarias y recopilar información sobre sus características, necesidades y condiciones, para luego consignar y verificar esa información (Barca y Mejía 2023; Lindert et al. 2020). El registro es el primer eslabón de la cadena de prestación, al que le siguen la inscripción, la prestación, la gestión y la evaluación (Lindert et al. 2020). Este procedimiento tiene una importancia particular para las personas más vulnerables en la sociedad —en especial, para las personas en situación de pobreza extrema, pero también para las personas trabajadoras en empleo informal—, ya que los sistemas de registro sólidos incrementan la visibilidad y le permiten al Gobierno atender las necesidades de la población después de algún acontecimiento o catástrofe.

Si pensamos en la protección social como un “sistema solar” (Barca y Mejía 2023), el registro es el anillo exterior de lo que se describe como “sistemas de la prestación”. Estos elementos constituyen las funciones administrativas necesarias para suministrar la prestación adecuada a la persona adecuada, en el lugar adecuado, para quienes la necesitan. Para lograr este objetivo, los Gobiernos suelen contar con tres tipos de registros: registros sociales, registros únicos y registro de personas beneficiarias.

Los registros sociales son bases de datos unificadas y focalizadas que brindan información sobre los individuos u hogares potencialmente aptos, y pueden usarse

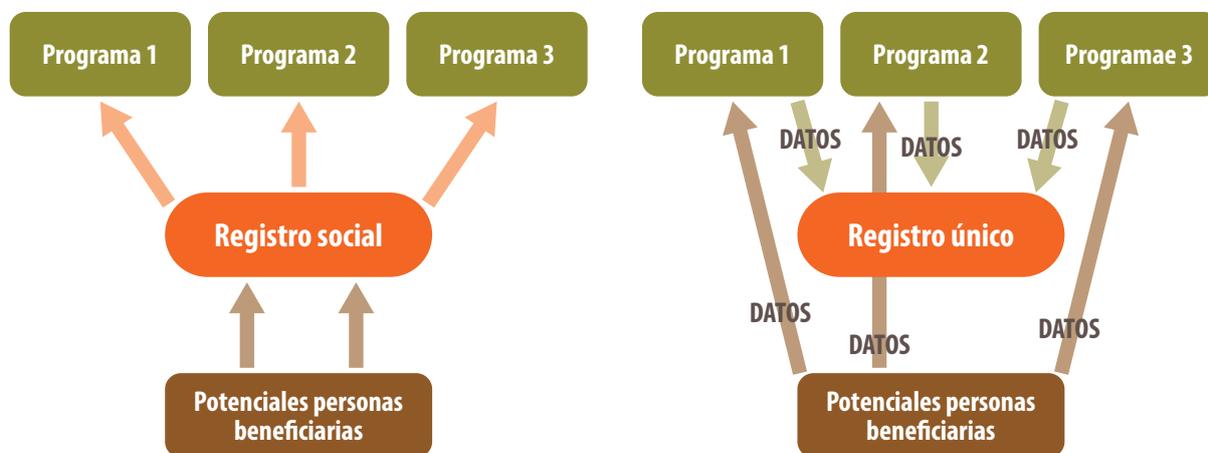


Fuente: Barca y Mejía (2023)

para seleccionar a las personas beneficiarias de los regímenes de asistencia social enfocados en atajar la pobreza (Chirchir y Farooq 2016). Estos registros reúnen información pertinente sobre las posibles personas beneficiarias y excluyen a quienes no cumplen los criterios. A menudo jerarquizan los hogares según su nivel de riqueza, de modo que los programas centrados en la pobreza pueden usar esta jerarquía para seleccionar a las personas beneficiarias. En muchos países en desarrollo, como Indonesia, Pakistán y Colombia, la información almacenada en registros únicos es recopilada, en principio, para apoyar la evaluación de pobreza que realizan los programas de protección social que son como una red de seguridad (Chirchir y Farooq 2016).

Los registros únicos son plataformas que reúnen información proveniente de todas las bases de datos gubernamentales. Pueden ser usados por los Gobiernos como herramientas de seguimiento y servir de nexo de información porque hacen posible la interacción entre programas individuales y otras bases de datos externas que pueden tener un papel en las políticas sociales, tales como los sistemas tributarios, los registros civiles y las bases de datos de limitaciones en la actividad (Chirchir y Farooq 2016). El Banco Mundial, sin embargo, estima que el ‘registro único’ es un término referente a un tipo particular de registro social que les sirve a múltiples programas (otros países pueden llamarlo “registro unívoco” o “registro unificado”). Independientemente del uso de términos como “único” o “unívoco”, pueden coexistir múltiples registros en un país y el término indica con frecuencia que, si bien el registro social puede servir de puerta de entrada a múltiples programas, es posible que otros programas sigan operando en paralelo sus propios sistemas de registro e idoneidad (Leite et al. 2017).

Los registros de personas beneficiarias son las listas reales de personas beneficiarias de un programa en particular. Sus propósitos, cobertura poblacional y funciones los distinguen de los registros sociales. Mientras que estos últimos comprenden información de todas las personas solicitantes y respaldan las funciones de “puerta de entrada”, es decir, la captación, el registro y la idoneidad, los registros de personas beneficiarias incluyen información únicamente sobre las personas ya inscritas en los programas específicos para apoyar la administración de personas beneficiarias y prestaciones. Otros elementos generalmente incluyen sistemas de administración de prestaciones, sistemas de resarcimiento de daños, sistemas de gestión de casos y sistemas únicos de identificación (Leite et al. 2017).



Fuente: Autoría propia

Existe la posibilidad de que algunos países cuenten con un registro social, pero no con un registro de personas beneficiarias; o que otros tengan el segundo, pero no el primero; y algunos pueden contar con ambos. Por ejemplo, Brasil ha desarrollado un registro social, el Cadastro Único (CadÚnico, o Registro Unificado), para coordinar las prestaciones y las personas beneficiarias de múltiples programas, pero no dispone de un registro de personas beneficiarias. Este registro social unificado hace posible que Brasil evalúe la demanda de los programas sociales trazando un perfil de las necesidades y condiciones de varios grupos poblacionales. Por su parte, Sudáfrica cuenta con un registro de personas beneficiarias, el Sistema Nacional de Información Social Integrada (NISIS, por sus siglas en inglés), pero no tiene un registro social. El NISIS le permite a Sudáfrica seguir y coordinar la “oferta” de los programas sociales, así como evaluar lagunas y duplicaciones en la cobertura de varios conjuntos de prestaciones y servicios clave que podrían adaptarse a las necesidades específicas de grupos cuyo perfil ya se ha trazado. Otro ejemplo viene de Chile y Turquía, donde existen ambos tipos de registros, lo que permite a esos países combinar

evaluaciones tanto de la “oferta” como de la “demanda” a la hora de elaborar políticas de protección social (Leite et al. 2017). En Chile, estos registros son la base de 80 programas distintos (Banco Mundial 2015).

Los registros sociales no están libres de objeciones. Algunas de las principales críticas incluyen las siguientes:

- Tales registros, a pesar de ser promovidos como una herramienta que aporta a muchos objetivos de las políticas sociales, en realidad se usan como herramientas centradas principalmente en atajar la pobreza, desatendiendo la evidencia que demuestra cuán deficientes son para identificar con precisión los niveles de pobreza (Kidd y Sibun 2020). Un reto clave es escoger los métodos cuantitativos (prueba indirecta de medios) que deben emplearse para procesar la información de los registros sociales a fin de estimar la riqueza o el ingreso de las personas o de los hogares, y determinar quiénes se sitúan por debajo de la línea de pobreza.
- El uso de los registros sociales, combinado con programas contra la pobreza basados en la prueba de medios, puede ser perjudicial en entornos donde la pobreza es generalizada y hay poca diferencia en los ingresos y los activos de la población en situación de pobreza y la que está en situación de casi pobreza. En países donde la porción de la “casi pobreza” es elevada, existe un alto riesgo de que los registros sociales produzcan errores y excluyan permanentemente a personas en situación de necesidad de buena parte de la política social, en virtud de su papel como “guardianes” en el sistema de protección social más amplio. En Colombia e Indonesia, estos errores de exclusión han alcanzado el 60 % y el 71 % respectivamente (Kidd et al. 2019). En algunos países, dichos errores llegan al 90 % debido a factores como el diseño erróneo de la prueba indirecta de medios utilizada, la baja calidad de las encuestas del registro social y la falsificación de información por parte de las personas encuestadas (Kidd y Mohamud 2021).
- La movilidad en materia de ingresos puede ocurrir más rápido que la actualización de la información. Para resaltar cómo esto puede tener efectos importantes en los programas centrados en la pobreza, Kidd et al. (2017) muestran que, en Ruanda y Uganda en apenas unos años (2010-2011 versus 2013-2014), las personas en situación de pobreza o con ingresos medios cayeron a los quintiles más pobres. Del mismo modo, las familias en los quintiles de menores ingresos, o de los más bajos, pueden mejorar su situación en términos relativos. Casi la mitad de los hogares que constituían el 20 % de la población más pobre salió de esta situación en ambos países durante este breve período. De esta movilidad surgen errores significativos de inclusión y de exclusión cuando se utilizan mecanismos estáticos centrados en la pobreza.
- Los registros sociales pueden ser inadecuados para proteger a personas o familias después de una catástrofe. Debido a que estos sistemas utilizan datos recopilados años atrás sobre los activos de un hogar, no nos dicen mucho del ingreso actual de una familia (Kidd et al. 2017). Cuando estalló la crisis de la COVID-19, millones de personas necesitadas no se hallaban en las bases de datos de los registros sociales, lo que retrasó su acceso a prestaciones o las excluyó de toda asistencia social.

Si bien hay debates sobre la mejor manera de implementar los registros y sobre su papel en los sistemas de protección social, la pandemia de la COVID-19 ha hecho manifiesta la importancia de contar con sistemas de registro sólidos y universales. En general, los países con sistemas de registro masivos y actualizados tuvieron un mejor desempeño a la hora de responder a las necesidades que la crisis acarreó en materia de protección social, ya que pudieron identificar, inscribir y llegar de manera más oportuna a grupos excluidos previamente que aquellos países que carecían de tales sistemas o que tenían sistemas y programas centrados en la pobreza muy limitados o restrictivos e inflexibles (Kidd y Sibun 2020; Beazley et al. 2021).

Por consiguiente, se considera que una lección clave de la pandemia es desarrollar registros más completos, flexibles e incluyentes de individuos y familias a menudo ausentes de las bases de datos centradas en la pobreza, pero vulnerables a las catástrofes (Ohlenburg 2022; Bastagli y Lowe 2021). Esto tiene una importancia particular para las personas trabajadoras en empleo informal, que con frecuencia son excluidas de las bases de datos que se enfocan de manera restrictiva en los miembros de la sociedad en situación de extrema pobreza, y no contemplan la vulnerabilidad significativa de las personas trabajadoras en empleo informal. En Tailandia, por ejemplo, el registro tiene lugar una vez al año. Las personas solicitantes pueden presentarse personalmente en la oficina de la autoridad

local o suscribirse en una unidad itinerante de registro (Banco Mundial y Organización Internacional del Trabajo 2016), lo que hace posible que el Gobierno lleve un registro más actualizado.

Estrategias para el registro

El registro supone una serie de procesos dentro de la cadena de prestación más amplia en materia de protección social: el trabajo de acercamiento, la evaluación y la inscripción o matriculación.

El trabajo de acercamiento es un elemento clave del registro. Comienza con comunicarles con claridad a las personas la existencia de un programa de protección social: quiénes son aptas y cómo registrarse (Alvarenga 2022). Implica explicar cuidadosamente cómo funciona todo el proceso: cómo registrarse, qué tipo de información se les solicitará, qué documentos tendrán que presentar, cómo se notificará a las personas en caso de que se las considere aptas o no, o respecto a la inscripción, etc. (Grunfeld y Ruggia-Frick, 2022).

Los mecanismos, plataformas y campañas de acercamiento pueden aprovechar el uso de las tecnologías digitales para incrementar la visibilidad de un programa, divulgándolo a gran escala para que se enteren más personas. El uso de tecnologías digitales tuvo una gran importancia durante la crisis de la COVID-19. Muchos países, como Colombia, Costa Rica, Paraguay, Pakistán y Togo, recurrieron al uso de mensajería de telefonía móvil para llegar a las potenciales personas beneficiarias. En Brasil, Jordania y Perú, los Gobiernos utilizaron plataformas en línea o aplicaciones móviles. La estrategia en Bangladés consistió en adaptar el número nacional de asistencia telefónica. Todos estos países adaptaron o expandieron sistemas que ya usaban antes de la crisis (Barca 2021).

Otro elemento clave en la cadena de registro es la calidad de los sistemas de información que acompañan la toma de decisiones: hasta qué punto los datos están actualizados y, por ende, representan con precisión las condiciones de los individuos y hogares. Con ese fin, los países se amparan en una variedad de estrategias de registro: censos y procesos de registro (en línea o sin necesidad de conexión) por encargo.

- Las barridas censales o censos en masa son un enfoque típico de la inscripción a través de olas de recopilación de datos en masa. Los registros por censo suelen realizarse cada 4 o 5 años, con lo cual la inscripción (y las actualizaciones) se cierra en los años intermedios. En algunos casos, sin embargo, el registro toma mucho más tiempo para actualizarse. Los censos en masa también son un componente clave de los regímenes de asistencia social, en particular de aquellos programas basados en transferencias de efectivo para atajar la pobreza. Ejemplos de este método de registro “estático” en masa son el Registro Nacional Socioeconómico Benazir (NSER, por su sigla en inglés) en Pakistán, actualizado recientemente en 2021, y el SISBEN colombiano, actualizado en 2023. En el caso del sistema colombiano, aunque se actualiza con la frecuencia habitual de un censo en masa, los errores de exclusión rondan el 19 % (Sims 2020).

Ventaja

Este método es más adecuado para entornos con pobreza elevada, tasas de idoneidad elevadas, un alto grado de homogeneidad socioeconómica y niveles estables de pobreza, donde los programas necesitan llevar registro de hogares que no son pobres y de los que viven en una situación cercana a la pobreza –vinculado a los regímenes del seguro social o en caso de una emergencia (Barca y Hebbar 2020)–. Muchos países operan con estos “sistemas fijos basados en una lista”, ya que es difícil conseguir muchos de los ingredientes claves para implementar sistemas de inclusión dinámicos (Leite et al. 2017).

Desventaja

Puede conservar datos desactualizados durante largos períodos (Kidd et al 2021), ya que los censos en masa son muy onerosos en términos logísticos y de recursos. Esta limitación ha resultado trascendental para países, como Filipinas, cuyos registros sociales generales no estaban al día. Por ello, cuando la COVID-19 estalló, Filipinas tuvo que basarse en un registro manual para entregar la prestación a la población destinataria (Beazley et al. 2021).

- El registro bajo demanda. Conseguir una frecuencia de actualización que garantice una cobertura oportuna es un reto permanente de los sistemas basados en encuestas, y la pandemia ha demostrado que son frágiles en tiempos de crisis. Para encarar la cuestión de la frecuencia, algunas personas especialistas recomiendan poner más énfasis en el registro bajo demanda que en las encuestas en masa (Ohlenburg 2022). Los sistemas bajo demanda son considerados dinámicos porque los datos y el registro son procesos continuos y, por lo tanto, capaces de captar fluctuaciones de la pobreza y vulnerabilidad de los hogares, y así ajustar las listas de personas beneficiarias y las prestaciones de los programas de protección social.

Ventaja

Quienes defienden el registro bajo demanda sostienen que esta aplicación, con un proceso de inscripción abierto a lo largo del año en el registro social, combinado con un activo trabajo de acercamiento a la población vulnerable, pueden servir de puerta de entrada “dinámica” para incluir a la población en situación de pobreza y vulnerabilidad (Leite et al. 2017).

Desventaja

Es difícil implementar programas bajo demanda en países de bajos ingresos, donde los programas de asistencia social son más bien recientes, la cobertura no tiene mucho alcance, el espacio fiscal es restringido y la capacidad administrativa, limitada (Leite et al. 2017). Estos enfoques “dinámicos”, pese a no ser tan extensos como los censos en masa, conllevan un esfuerzo laborioso y constante para recopilar y analizar datos mediante el cual todos los hogares de una zona son entrevistados en intervalos seleccionados

Sea cual fuere la estrategia de registro, una cuestión importante es la privacidad y seguridad de los datos a lo largo del ciclo de implementación: la recopilación, el registro, el almacenamiento, el uso, el intercambio y la eliminación. Estas estrategias a menudo contienen grandes cantidades de datos sensibles sobre individuos y hogares, lo que requiere que los datos personales de las personas beneficiarias sean tratados de manera segura. Muchos países, sin embargo, no cuentan con reglamentación ni con un marco para la protección de datos. En África y Asia, solo el 60 % de los países tienen instituciones que se ocupan de eso, mientras que, entre los países con ingresos más bajos, la proporción cae al 50 % (UNCTAD 2021). Incluso en países donde existen leyes al respecto, la legislación se desarrolló a menudo después de grandes proyectos de digitalización, en algunos casos porque hubo violaciones durante el despliegue del proyecto. Por ejemplo, en India, hubo fallas de seguridad en la puesta en marcha de la identificación biométrica Aadhaar, lo que obligó al Gobierno a reforzar los marcos de la protección de datos (Lowe 2023). Esto implica garantizar la seguridad de los datos mediante un equipo apropiado (es decir, soportes físicos y lógicos) y las pautas necesarias procedimentales y organizacionales. Además, es importante proteger el acceso a los datos, las instalaciones y los soportes físicos y lógicos de un programa social (Wagner y Ferro 2020).

Enfoques innovadores para el registro

En los últimos años, los avances tecnológicos han permitido que muchos países simplifiquen e integren el registro y la actualización de datos a los sistemas de información a fin de elevar la captación y la inclusión dinámica. Cuando estalló la pandemia, los sistemas de datos y las tecnologías digitales desempeñaron un papel crucial en la entrega de la ayuda durante muchas etapas del sistema, en particular en el registro.

Las limitaciones causadas por la pandemia aceleraron formas innovadoras de registrar a las nuevas personas beneficiarias, empezando por el trabajo de acercamiento. Los Gobiernos se apoyaron en tecnologías digitales para llegar a las personas beneficiarias a una escala sin precedentes (Alfers y Juergens-Grant 2023; IPC-IG 2021).

En muchos países, el registro bajo demanda hoy cuenta con la facilidad de varios canales digitales, lo que incluye presentar una solicitud en un sitio web, por correo electrónico, por algún sistema de mensajería telefónica o alguna aplicación móvil. Estos canales se comenzaron a usar en países como Argentina, Chile y Australia. En Brasil, la

aplicación recibió 57,2 millones de peticiones en 2020, de las cuales 38,2 millones fueron consideradas aptas para la Ayuda de Emergencia. Con esta información, se dio lugar a un nuevo registro social, llamado ExtraCad. Entre los méritos de esta base de datos figura la visibilidad que les proporcionó a segmentos de la población hasta entonces excluidos de las bases de datos gubernamentales, particularmente a las personas trabajadoras en empleo informal (Banco Mundial 2021). Sin embargo, aunque el uso de tecnologías móviles fue útil para llegar a una población más amplia en Brasil, el salto abrupto a la tecnología digital en 2021 reemplazó en ocasiones procesos humanizados e integrales. La personalización se vio reemplazada por un proceso automatizado, en el que se crea automáticamente una cuenta digital. Lo que media la relación entre la ciudadanía y el Estado es una aplicación, en lugar de una persona, lo que también puede levantar barreras contra muchas personas beneficiarias acostumbradas al sistema actual de tarjeta o credencial (Afshar 2021).

El registro bajo demanda comprende múltiples tipos de enfoques.

- Un activo trabajo de acercamiento de manera periódica. Los países que toman esta ruta de manera intermitente buscan fomentar que las personas ya registradas actualicen sus datos y también la inclusión de nuevas personas beneficiarias. Se utiliza este enfoque especialmente en los países con capacidad fiscal y administrativa limitada para desplegar estructuras permanentes de registro bajo demanda. También puede complementar estrategias de registro en masa o bajo demanda. Aunque no se ajusta exactamente a la definición estándar de un registro bajo demanda, el enfoque garantiza que los sistemas sean dinámicos por lo menos de manera parcial (Azad 2022). En Zambia, el programa Social Cash Transfer (transferencia social de efectivo) utilizó un mecanismo con el que se incentivaba a los hogares potencialmente aptos a ir a registrarse a lugares designados durante horarios específicos (Arruda y Dubois 2018). Brasil emplea un enfoque de “búsqueda activa”, mediante el cual las y los asistentes sociales buscan de manera proactiva a personas aptas, en especial entre los grupos vulnerables (indígenas, habitantes de barrios desfavorecidos, comunidades rurales, etc.), para incluirlas en el registro social.
- Las oficinas locales permanentes brindan un registro bajo demanda continuo y habilitan personal para que se ponga directamente en contacto con las personas beneficiarias. En México, las personas funcionarias aprovechan el primer período de pago en el año para preguntarles a las personas beneficiarias, mediante un formulario de actualización, si ha habido algún cambio respecto de la información almacenada hasta ese momento (Azad 2022). De manera similar, las oficinas federales de asistencia social desconcentradas en el nivel local tienen la ventaja de un entorno más estable, lo que les permite el desarrollo permanente de capacidad y experiencia administrativas en materia de protección social, como ocurre en Mauricio y en Sudáfrica. En países donde las oficinas de gobierno municipal o local y los sistemas descentralizados de gobierno se han establecido de manera firme, el Gobierno central solamente crea un marco de trabajo común y brinda capacitación. Muchos países en América Latina utilizan este enfoque. Brasil, por ejemplo, usa oficinas locales, llamadas CRAS (Centros de Referencia de Asistencia Social), como puntos fijos de avanzada donde las familias pueden ir a registrarse, lo que se combina con visitas domiciliarias por parte de las personas trabajadoras sociales de los CRAS y, en ocasiones, con el uso de estaciones móviles de servicios.
- Las unidades móviles pueden usarse no solo para el registro y el trabajo de acercamiento, sino también para brindar prestaciones. El Gobierno sudafricano, por ejemplo, introdujo estas unidades como parte de su Programa Integrado de Acercamiento para el Registro de las Comunidades (ICROP, por su sigla en inglés). Con equipo y personal propio, el ICROP facilita el registro y la inscripción de las personas beneficiarias, emite tarjetas inteligentes, mantiene una base de datos en línea, fomenta la toma de conciencia, brinda acceso a los puntos de pago y lleva a cabo visitas domiciliarias por personal médico y de trabajo social para garantizar que los individuos que se ven imposibilitados de ir al hospital o de salir de sus domicilios –a cuenta de una enfermedad o discapacidad– tengan acceso a los servicios y las prestaciones (Banco Mundial y Organización Internacional del Trabajo 2016).
- Los enfoques de ventana digital son adoptados por muchos países en desarrollo cada vez más para las fases de captación, registro y actualización de datos. A menudo se complementan con otros sistemas de registro ya existentes, como en Chile y en Azerbaián (Azad 2022).

- Otras formas de tecnología digital utilizada en el registro pueden incluir los chatbots de la Inteligencia Artificial (IA) que ayudan a guiar a las personas solicitantes en los procesos de solicitud, así como el reconocimiento de imágenes con IA y la identificación digital, incluidos los datos biométricos (Lowe 2023). En la República Democrática del Congo, por ejemplo, el Gobierno ha utilizado datos de la telefonía móvil de barrios prioritarios para identificar y excluir a las personas propietarias de teléfonos móviles con poca probabilidad de ser aptas para algún programa, pero también para llegar a potenciales personas beneficiarias mediante mensajes de texto. En Namibia, también mediante mensajes de texto, el Gobierno recibió casi el 80 % de las solicitudes en una semana, mientras que, en Perú, más de tres millones de hogares se registraron en línea durante la ventana de dos semanas (Barca y Hebbar 2020).
- Otro enfoque es el uso de bases de datos de la administración (por ejemplo, el registro civil o de identificación nacional) para registrar a las personas beneficiarias: el sistema inicia el registro de forma automática, así como la inscripción subsiguiente, sin esperar a que la ciudadanía presente ella misma su solicitud (Beazley y Barca 2020). La ventaja de este enfoque reside en la disminución de los costos de recopilación de datos (Azad 2022). Durante las respuestas a la pandemia, la inscripción automática a partir de bases de datos preexistentes significó una gran ventaja. Mediante este enfoque, lograron pagarles a las personas beneficiarias más rápido que por medio de las intervenciones que dependían de la recopilación de nuevos datos a través del registro bajo demanda, la selección comunitaria de las personas beneficiarias o modalidades mixtas (Beazley et al. 2021). Un ejemplo durante la pandemia de la COVID-19 vino de Brasil: para identificar a las personas beneficiarias, la Ayuda de Emergencia (Auxilio Emergencial) combinó el uso de su registro social CadÚnico con otras bases de datos (tales como el programa “Microempendedor individual”, registros laborales formales y bases de datos de la autoridad fiscal) (Banco Mundial 2021). Chile usa, de manera extensiva, los datos administrativos existentes y la información que brinda la ciudadanía a nivel local. Estas bases de datos contienen información de otras entidades, como el Registro Nacional de la Discapacidad, el Registro de Vehículos Motorizados, el Registro del Pago del Impuesto sobre la Renta, el Registro Civil, entre otros. Un factor clave del éxito para tal interoperatividad fue la existencia de registros casi universales de nacimiento y del número de identificación, que cubren el 98 % de la población del país (Lowe 2023).

Durante el primer año de la crisis de la COVID-19, Perú consiguió cubrir las lagunas y la información desactualizada en sus bases de datos aprovechando otras bases de datos gubernamentales y el registro bajo demanda. Esto permitió que el Gobierno creara un registro social actualizado y casi universal con 33 millones de personas (a partir de una base pre-pandémica de 25 millones de personas inscritas en el registro social), que contabiliza a más del 99 % de la población. Para lograrlo, el Gobierno utilizó bases de datos intergubernamentales de otras maneras, por ejemplo, intercambiando datos con las entidades del Gobierno responsables de diferentes registros: civil, de identificación, de personas con discapacidades, de migración y del banco estatal (Beazley et al. 2021). También utilizó información proporcionada por organizaciones no gubernamentales para atender la insuficiencia y desactualización de la información. Sin embargo, se rehusó a utilizar los datos administrativos locales disponibles para registrar a las personas trabajadoras en empleo informal y brindarles las prestaciones de emergencia (Rocca, 2021).

- Los sistemas de datos integrados representan un paso adicional con relación al uso de otras bases de datos gubernamentales. Mongolia utilizó esta estrategia en su Programa Universal de Dinero para la Infancia. Entre 2012 y 2016, el país implementó un programa universal de prestaciones familiares con el que inscribía automáticamente a todas las infancias recién nacidas tan pronto como entraban en el Registro Civil (Azad 2022). Esta integración aseguraba la interrupción automática de los pagos cuando la persona cumplía los 18 años de edad. Para 2015, el impulso de la inscripción había alcanzado casi el 100 % de las personas de 0 a 17 años que recibían esta prestación. Otros ejemplos de la integración de datos para el registro están relacionados con el uso de las identificaciones nacionales para llegar a todas las potenciales personas beneficiarias (Singapur y Japón, por ejemplo) o para identificar a las personas con mejor posición económica (como en Bolivia, Namibia y Argentina). Algunos países, como EE. UU., recurrieron a los datos fiscales para poner en marcha su programa de emergencia (Barca y Hebbar 2020).

Estos enfoques innovadores han sido objeto tanto de elogios como de críticas, que a menudo tienen que ver con su carácter digital. Las críticas sostienen que, pese a los argumentos sobre los beneficios en términos de rentabilidad y eficiencia, no hay evidencia clara de que la digitalización reduzca costos administrativos, por lo menos a mediano plazo (Wagner y Ferro, 2020; Gelb et al., 2020). De hecho, si bien las nuevas tecnologías podrían simplificar procesos, reducir algunos costos e incrementar la eficiencia, es posible que acarreen costos tecnológicos elevados, que requieran invertir en capacitar al personal administrativo y que necesiten actualizar los datos regularmente (Wagner y Ferro 2020).

Aunque la tecnología digital puede reducir algunas barreras, como la necesidad de recorrer largas distancias para registrarse o recibir un pago —lo que puede disminuir el tiempo que las personas trabajadoras en empleo informal deben interrumpir su trabajo—, también es posible que surjan nuevas barreras. La restricción del registro a los medios digitales es considerada uno de los aspectos más controversiales de la Ayuda de Emergencia brasileña, ya que impone obstáculos inmediatos a la porción de la población que no tiene acceso a internet (Banco Mundial 2021). De manera más amplia, la protección social digitalizada puede generar nuevas formas de injusticias, tales como que la protección social dé un giro y pase de ser un derecho fundamental a estar condicionada a la inscripción en sistemas digitales, como es el caso del Aadhaar en India o de los sistemas de identificación digital Ndagá Muntu en Uganda (Cioffi et al. 2022; Masiero y Das 2019).

La inclusión de las personas trabajadoras en empleo informal en los procesos de registro

A pesar de que se han hecho numerosos esfuerzos durante las últimas dos décadas para mejorar la captación y fortalecer las bases de datos de los registros sociales, un reto clave para los Gobiernos es la inclusión en sus sistemas de aquellas personas que no se hallan ni en las situaciones más precarias de pobreza, ni entre las personas trabajadoras más acomodadas del sector formal: el llamado sector intermedio olvidado. Este problema es importante principalmente en los países en desarrollo, donde las personas trabajadoras en empleo informal constituyen la mayor parte de la fuerza de trabajo y, con frecuencia, quedan excluidas de los programas de protección social. Estas personas trabajadoras se enfrentan a una frecuente exclusión de las bases de datos gubernamentales debido a la falta de documentación, a información limitada sobre los procesos y a la inaccesibilidad de los mismos. En un entorno excluyente, el paso hacia sistemas digitales que no solo son guardianes de programas específicos, sino prerrequisitos para la participación en buena parte de la política pública, suscita preocupación (Alfers y Juergens-Grant 2023).

El sector público en los países de ingresos bajos y medios suele resguardar información socioeconómica detallada sobre dos segmentos poblacionales: uno en situación de pobreza crónica, que recibe asistencia social y queda cubierto por las bases de datos de programas y los registros sociales; y otro relativamente poco numeroso de personas asalariadas en el sector formal, cubiertas por los sistemas fiscales y de seguridad social. Aunque la proporción de la población captada en los registros sociales ha aumentado en muchos países, una parte importante de la población —en el medio de los extremos de la distribución del ingreso— todavía sigue siendo “desconocida” para los sistemas. Sin embargo, la experiencia en algunos países, como Brasil, ha demostrado que esta parte de la población, si bien queda excluida de las bases de datos orientadas a la protección social, ya aparece algunas veces en otras bases de datos gubernamentales (Ohlenburg 2022), lo que apunta a la posibilidad de atar cabos y mejorar la interoperatividad de bases de datos distintas.

El “sector intermedio olvidado” de hogares económicamente vulnerables con pocos ahorros necesita ser incluido en los registros de protección social no solo para garantizarles el acceso universal a los programas de protección social que los protejan contra los riesgos económicos y del ciclo de vida, sino que también se les brinde un apoyo generalizado durante catástrofes y crisis de gran escala.

Si bien el registro bajo demanda desempeñó un papel significativo en la expansión del alcance de los programas de protección social durante la COVID-19, también es probable que haya acarreado la exclusión significativa de personas y comunidades vulnerables que carecían de acceso a internet, telefonía móvil, etc., ya que a menudo el registro bajo demanda se llevó a cabo en línea o vía mensajes de texto. Esto subraya la importancia de los esfuerzos

de inclusión digital (Beazley et al. 2021). En Sudáfrica, durante la COVID-19, el Gobierno expandió la Ayuda Social contra las Dificultades, con la que llegó a millones de personas trabajadoras previamente excluidas, pero los requisitos del registro digital excluyeron a muchas otras personas sin acceso a internet ni telefonía móvil o sin una plena alfabetización digital (Faiker 2024).

Quienes más sienten estas barreras son las personas trabajadoras en empleo informal. El estudio de WIEGO realizado en once ciudades alrededor del mundo señaló los desafíos persistentes a los que se enfrenta este grupo cuando intenta acceder a la protección social. Entre los obstáculos clave, se hallan la falta de datos sobre las personas trabajadoras en empleo informal, los procedimientos administrativos complejos que conlleva la solicitud, así como el acceso limitado a las tecnologías digitales y los bajos niveles de alfabetización digital (Chen et al. 2021). Debido a que la digitalización de la protección social se enmarca a menudo en la intención de reducir “fugas e inclusiones erróneas” (Lowe 2022), es probable que las personas trabajadoras en empleo informal sigan encontrando importantes barreras administrativas y de documentación para registrarse (Alfers y Juergens-Grant 2023).

La invisibilidad en las bases de datos gubernamentales que actuaron como guardianes de la idoneidad para la ayuda fue un problema significativo. En Lima, Perú, por ejemplo, la barrera más importante de acceso era no figurar en el registro social del país, que estaba incompleto. La exclusión de las personas no ciudadanas y los requisitos de documentación fueron las principales razones aducidas por las personas encuestadas que no recibieron ayuda en Bangkok (Tailandia) y Durban (Sudáfrica) (Alfers y Juergens-Grant 2023).

No obstante, muchos Gobiernos han estado intentando incluir a las personas trabajadoras en empleo informal en los regímenes de protección social. En Camboya, en 2008, el Gobierno implementó la base de datos IDPoor, que facilita el acceso a la asistencia social para los hogares más desfavorecidos. Cuando estalló la pandemia, el Gobierno se abrió paso para extender el programa mediante el lanzamiento a nivel nacional de ODIDPoor (un registro bajo demanda de las personas en situación de pobreza), lo que hizo posible un proceso de registro durante todo el año. Sin embargo, aunque se innovó el acceso a la base IDPoor, las críticas sostienen que se necesita más esfuerzo para posibilitar y expandir la inclusión de los grupos que, aunque no están desamparados, siguen siendo vulnerables (Sevilla y Sinoeun 2023). Aducen que enfocarse en las personas trabajadoras en domicilio en una situación de pobreza más grave requiere un sistema altamente dinámico que capte sus realidades, las cuales están en constante evolución. La IDPoor –sostienen– debería ampliar sus categorías para incluir a los hogares en situación de vulnerabilidad o de casi pobreza y diseñar un programa diferente para evitar que caigan en la pobreza (ibid.).

En 2021, en India, durante la pandemia, el Gobierno lanzó el portal e-Shram, que hizo posible, para septiembre de 2023, el registro de más de 280 millones de personas trabajadoras en empleo informal (Piyusha 2023). Se trató de la primera Base de Datos Nacional de Personas Trabajadoras no Sindicalizadas que incluía a personas trabajadoras migrantes, de la construcción y de plataformas. Con la construcción de una base de datos nacional de potenciales personas beneficiarias de la protección social, el Gobierno podrá entregar prestaciones sin importar en qué parte del país viva la persona (Majithia 2022). La idea es que, con el tiempo, la base de datos e-Shram se vincule con los regímenes de protección social, como las pensiones y la seguridad social, pero a la fecha no ha sido ligada a ningún programa. A pesar de sus limitaciones, el e-Shram constituye una primera etapa para aumentar la visibilidad de muchas categorías de trabajo, como el trabajo en domicilio (ibid.), y puede convertirse en una puerta de entrada a la protección social.

Un ejemplo más de los esfuerzos gubernamentales para incluir a las personas trabajadoras en empleo informal en la protección social ha tenido lugar en Kenia, desde 2019. El país se asoció con compañías privadas y operadores móviles, centrados en las personas trabajadoras en empleo informal, incluidas las vendedoras ambulantes y del sector del transporte. La plataforma hace que el registro de las personas trabajadoras autoempleadas en la seguridad social sea más fácil y conveniente, por medio de sus teléfonos móviles (Bamu et al. 2022).

Las organizaciones de personas trabajadoras en empleo informal han desempeñado un papel fundamental para ampliar el alcance de las medidas de ayuda, prestando asistencia en la selección e identificación. En los casos más exitosos, esta función de facilitación se basó en antiguas relaciones con el Estado, por lo que ya existía cierto grado

de confianza y comunicación (Alfers y Juergens-Grant 2023). Se ha utilizado la información de organizaciones territoriales en la identificación de las personas beneficiarias, sobre todo en entornos en los que las personas trabajadoras en empleo informal están completamente ausentes de las bases de datos estatales. Por ejemplo, en Sierra Leona, se utilizaron listas del Gobierno y de asociaciones de comerciantes en la segunda etapa del proceso de selección e identificación para identificar hogares con personas trabajadoras en empleo informal (Alfers y Juergens-Grant 2023). En Nigeria, se utilizaron datos de asociaciones empresariales, pequeñas y medianas empresas, y otros grupos, para complementar la prueba indirecta de medios (Gentilini et al. 2021).

Numerosas organizaciones de base de miembros hicieron uso de su relación con actores estatales para prestar servicios “de último tramo”, con lo que garantizaron que sus miembros pudieran superar las principales barreras de acceso, por ejemplo, las creadas por el uso de sistemas y plataformas digitales (Alfers 2021; Alfers et al. 2020). Esto pone de relieve la importancia de las organizaciones territoriales como participantes activas en la esfera pública y la necesidad absolutamente real de incluirlas en todos los sistemas de protección social, desde la gobernanza hasta la prestación.

La entrega de apoyo “de último tramo”, la cual asegura la conexión entre las prestaciones y las personas beneficiarias, fue una tarea importante de las organizaciones de personas trabajadoras en empleo informal. Las organizaciones se esforzaron por establecer conexiones más eficaces entre sus circunscripciones y las prestaciones estatales ofrecidas, y, de ese modo, facilitaron el acceso a las medidas de ayuda. En Tailandia, por ejemplo, las organizaciones territoriales dieron a conocer las prestaciones en efectivo del Gobierno y ayudaron a sus miembros a registrarse en línea. En India, las organizaciones de personas trabajadoras en empleo informal dieron a conocer las prestaciones alimentarias y trabajaron con sus miembros para superar las barreras de documentación que les impedían el acceso (WIEGO 2021). Las organizaciones también prestaron servicios esenciales a sus miembros, con lo que complementaron la respuesta a la crisis. En algunas áreas de India, los grupos de autoayuda han trabajado para crear cocinas comunitarias (de Hoop et al. 2020) y proporcionar información sobre salud pública, acceso a pruebas y atención médica, y equipos de protección personal (Kala 2020).

Por otro lado, algunas críticas sostienen que el uso de las organizaciones territoriales en la identificación y selección viene con “un costo financiero” y puede socavar, a la larga, la construcción de la capacidad estatal para brindar protección social (Gentilini et al. 2021). También replican que, en ocasiones, la dependencia respecto de las organizaciones territoriales ha trasladado la responsabilidad injustamente a organizaciones con escasos recursos de personas en situación de pobreza, y puede dar lugar a la exclusión de las personas no organizadas (Devenish y Afshar 2021).

Bibliografía

Afshar, C. (2021). [Bolsa Familia: pasado y futuro del programa brasileño de subsidios en efectivo](#). Nota informativa de WIEGO sobre protección social n.º 3.

Alfers, L. (2021, 16 de junio). [A Digital Bridge to Social Support](#) [Un puente digital hacia el apoyo social]. Project Syndicate.

Alfers, L., C. A. Braham, M. Chen, E. Grapsa, J. Harvey, G. Ismail, A.C. Ogando, S.O. Reed, S. Roever, M. Rogan, S. Sinha, C. Skinner, y M. Valdivia (2022). [La COVID-19 y el trabajo informal en once ciudades: caminos para la recuperación en medio de una crisis continua](#). Documento de trabajo de WIEGO n.º 43. Mánchester: WIEGO.

Alfers, L., G. Ismail, y M. Valdivia (2020). [Las personas trabajadoras en empleo informal y la respuesta de protección social a la COVID-19: ¿Quién recibió medidas de alivio? ¿Cómo? ¿Marcaron la diferencia?](#). La crisis de la COVID-19 y la economía informal. Análisis de políticas n.º 2. Mánchester: WIEGO.

Alfers, L., y Juergens-Grant, F. (2023). [Social protection, the COVID-19 crisis, and the informal economy](#) [Protección social, crisis de la COVID-19 y la economía informal]. Documento de trabajo de WIDER 2023/93. UNU-WIDER.

Alvarenga, Krista (2022, 5 de julio). [Digitalisation of Registries and Social Protection Service Delivery Chain](#) [Digitalización de los registros y de la cadena de prestación de servicios de protección social]. Blog del sitio web socialprotection.org.

Arruda, P., y L. Dubois (2018). [A brief history of Zambia's social cash transfer programme](#) [Breve historia del programa social de transferencias en efectivo de Zambia]. Nota de investigación n.º 62. Centro Internacional de Políticas para un Crecimiento Inclusivo.

Azad, Arif (2022). [Dynamic Social Registries in Social Protection: Best Practices and Recommendations](#) [Registros sociales dinámicos en la protección social: buenas prácticas y recomendaciones]. Documento sobre políticas de protección social II. PNUD y Gobierno de Pakistán.

Bamu, P., L. Alferts, R. Mudarikwa y T. Kamwimbi (2022). [Social Protection for Self-Employed Informal Workers in Sub-Saharan Africa: A rights-based assessment of the impact of the COVID-19 crisis](#) [Protección social de las personas trabajadoras independientes en África subsahariana: una evaluación del impacto que tuvo la crisis de la COVID-19 basada en los derechos]. Documento de consulta de WIEGO n.º 24. Mánchester, Reino Unido: WIEGO.

Banco Mundial (2015). [The State of Social Safety Nets 2015](#) [El estado de las redes de protección social en 2015]. Washington: Banco Mundial.

Banco Mundial (2021). [Enrolment and Eligibility Process of Brazil's Auxílio Emergencial: Data Processing and Use of Administrative Registries](#) [El proceso de inscripción y las posibilidades de calificar para la Ayuda de Emergencia de Brasil: procesamiento de datos y uso de registros administrativos]. Washington: Banco Mundial.

Banco Mundial y Organización Internacional del Trabajo (2016). [Universal Social Protection: Country Cases](#) [Protección social universal: casos nacionales]. Alianza Global para la Protección Social Universal (USP2030).

Barca V. (2017). [Integrating data and information management for social protection: social registries and integrated beneficiary registries](#) [Integrar la gestión de datos e información a la protección social: registros sociales y registros integrados de personas beneficiarias]. Canberra: Gobierno de Australia, Departamento de Comercio y Asuntos Internacionales.

Barca, V. (2021). [Digital Solutions for Social Protection System](#) [Soluciones digitales para el sistema de protección social]. Socialprotection.org [seminario web].

Barca, V., y J.G. Jaramillo Mejía (2023) [Social Protection as a 'Solar' System](#) [La protección social como un sistema "solar"]. Dispositivo de asistencia técnica, asesoramiento y recursos para la protección social (STAAR). Reino Unido: DAI Global UK Ltd.

Barca, V., y M. Hebbbar (2020). [On-demand and up to date? Dynamic inclusion and data updating for social assistance](#) [¿Bajo demanda y al día? Inclusión dinámica y actualización de datos para la asistencia social]. Berlín: Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ).

Bastagli, F., y C. Lowe (2021). [Social Protection Response to Covid-19 and Beyond: Emerging Evidence and Learning for Future Crises](#) [Respuesta en materia de protección social durante y después de la Covid-19: pruebas recientes y enseñanzas para futuras crisis]. Documento de trabajo del ODI n.º 614. Londres: Instituto para el Desarrollo de Ultramar (ODI).

Beazley, R., M. Marzi, y R. Steller (2021). [Drivers of Timely and Large-Scale Cash Responses to COVID-19: what does the data say?](#) [Impulsores de las respuestas monetarias oportunas y a gran escala ante la COVID-19: ¿qué dicen los datos?]. Servicio de asesoramiento de especialistas sobre enfoques de protección social para la COVID-19 (SPACE). Londres: DAI Global UK Ltd.

Beazley, R., y V. Barca (2020, 1º de junio). [Building on existing data, information systems and registration capacity to scale up social protection for COVID-19 response](#) [Aprovechar los datos, los sistemas de información y la capacidad de registro existentes para ampliar la protección social en la respuesta a la COVID-19]. Blog del sitio web socialprotection.org.

Chen, M., E. Grapsa, G. Ismail, M. Rogan, M. Valdivia, L. Alferts, J. Harvey, A.C. Ogando, S.O. Reed, y S. Roeber (2021). [COVID-19 and Informal Work: Distinct Pathways of Impact and Recovery in 11 Cities Around the World](#) [La COVID-19 y el trabajo informal: distintas vías de impacto y de recuperación en once ciudades alrededor del mundo]. Documento de trabajo del WIEGO n.º 42. Mánchester: WIEGO.

- Chirchir, R., y S. Farooq (2016). [Single Registries and Social Registries: clarifying the terminological confusion](#) [Registros únicos y registros sociales: aclarando la confusión terminológica]. *Perspectivas de Pathways sobre la política social en el desarrollo internacional* n.º 23, pp. 1-8.
- Cioffi, K., V. Adelmant, y C. van Veen (2022). [Paving a Digital Road to Hell? A Primer on the Role of the World Bank and Global Networks in Promoting Digital ID](#) [¿Preparando un camino digital al infierno? Nota informativa sobre el papel del Banco Mundial y las redes mundiales en la promoción de la identificación personal digital]. Centro de Derechos Humanos y Justicia Mundial, Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York.
- De Hoop, T., S. Desai, G. Siwach, C. Holla, Y. Belyakova, S. Paul, y R.J. Singh (2020). [Women's Groups and COVID-19: Challenges, Engagement, and Opportunities](#) [Grupos de mujeres y la COVID-19: desafíos, compromisos y oportunidades]. Nota informativa sobre políticas del ECWG (Consortio de evidencia sobre grupos de mujeres).
- Devenish, A., y C. Afshar (2021). [Respuestas de protección social a la COVID-19: el rol de la tecnología digital en las respuestas de protección social a COVID](#). Nota informativa de WIEGO sobre protección social n.º 5. Mánchester: WIEGO.
- Fayker, H. (2024, 9 de enero). [Digitization and Registration In South Africa](#) [Digitalización y registro en Sudáfrica]. Pódcast de WIEGO sobre la economía informal: protección social, episodio 36 [material auditivo].
- Gelb, A., A. Mukherjee, y K. Navis (2020). [Citizens and States: How Can Digital ID and Payments Improve State Capacity and Effectiveness?](#) [Ciudadanía y Estados: la identificación personal y los pagos digitales, ¿cómo pueden mejorar la capacidad y la eficacia del Estado?]. Washington: Centro para el Desarrollo Mundial.
- Gentilini, U., M. Almenfi, J. Blomquist, P. Dale, L. De la Flor Giuffra, V. Desai, M. Belen Fontenez, et al. (2021). [Social Protection and Jobs Responses to COVID-19: A Real-Time Review of Country Measures](#) [Respuestas a la COVID-19 en materia de protección social y empleos: revisión en tiempo real de las medidas nacionales]. Documento en constante actualización. Versión consultada: 15. Washington: Banco Mundial.
- Grunfeld, M., y R. Ruggia-Frick (2022). [Guideline for developing Interoperable Social Protection programs](#) [Guía para el desarrollo de programas de protección social interoperativos]. Berlín: Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ).
- IPC-IG. (2021). [Social Protection Responses to COVID-19 in the Global South: Online dashboard](#) [Respuestas en materia de protección social a la COVID-19 en los países del Sur: panel de control en línea].
- Kala, S. (2020). [Impact of COVID-19 on Women Home-Based Workers in South Asia](#) [Repercusiones de la COVID-19 en las trabajadoras en domicilio del Sur de Asia]. Deli: HomeNet Internacional.
- Kidd, S., B. Gelders, y D. Bailey-Athias (2017). [Exclusion by design: An assessment of the effectiveness of the proxy means test poverty targeting mechanism](#) [Exclusión desde el diseño: evaluación de la eficacia del mecanismo focalizado en la pobreza y basado en la prueba indirecta de medios]. Documento de trabajo sobre la extensión de la seguridad social n.º 56. Organización Internacional del Trabajo / *Development Pathways*.
- Kidd, S., D. Athias, e I. Mohamud (2021). [Social registries: a short history of abject failure](#) [Registros sociales: una breve historia de lamentables fracasos]. *Development Pathways* / ACT (Iglesia de Suecia).
- Kidd, S., L. Wapling, R. Schjoedt, B. Gelders, D. Bailey-Athias, A. Tran, y H. Salomon (2019). [Leaving No-one Behind: Building Inclusive Social Protection Systems for Persons with Disabilities](#) [Sin dejar a nadie atrás: la construcción de sistemas de protección social incluyentes para las personas con discapacidad]. Londres: Mecanismo UK-Aid / *Development Pathways*.
- Kidd, S., y D. Sibun (2020). [What Has the COVID-19 Crisis Taught Us about Social Protection?](#) [¿Qué nos ha enseñado la crisis de la COVID-19 sobre la protección social?]. *Perspectivas de Pathways sobre la política social en el desarrollo internacional* n.º 29. Londres: *Development Pathways*.
- Leite, P., T. George, C. Sun, T. Jones, y K. Lindert (2017). [Social Registries for Social Assistance and Beyond: A Guidance Note and Assessment Tool](#) [Registros sociales para la asistencia social y más allá: nota orientativa y herramienta de evaluación]. Washington: Banco Mundial.

- Lindert, K., T.G. Karippacheril, I.R. Caillava, y K.N. Chávez (Eds.) (2020). [Sourcebook on the Foundations of Social Protection Delivery Systems](#) [Libro de consulta sobre los fundamentos de los sistemas de protección social]. Washington: Banco Mundial.
- Lowe, C. (2022). [The digitalisation of social protection before and since the onset of Covid-19: Opportunities, challenges and lessons](#) [La digitalización de la protección social antes y desde el inicio de la COVID-19: oportunidades, retos y lecciones]. Documento de trabajo del ODI. Londres: Instituto para el Desarrollo de Ultramar (ODI).
- Lowe, C., J. Rigolini, L. Solbes Castro, y F. Bastagli (2023). [Pathways toward digitalization in Social Protection and Labor \(SPL\) service delivery](#) [Caminos hacia la digitalización en la prestación de servicios de protección social y trabajo]. Documento de debate sobre protección social y empleo n.º 2307. Washington: Banco Mundial.
- Majithia, A. (2022, 2 de diciembre). [India's Social Registry of Informal Workers](#) [Registro social de trabajadorxs en empleo informal en India]. Pódcast de WIEGO sobre la economía informal: protección social, episodio 30 [material auditivo].
- Masiero, S., y S. Das (2019). [Datafying anti-poverty programmes: implications for data justice](#) [Poner los datos en los programas de lucha contra la pobreza: implicaciones para la justicia sobre datos]. *Information, Communication & Society*, 22(7): pp. 916–933.
- Ohlenburg, T. (2022). [Social Protection in a Pandemic—Trends, Challenges, and Technology](#) [Protección social en una pandemia: tendencias, retos y tecnología]. Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ) / Banco Asiático de Desarrollo (BASD).
- Piyusha, V. (2023). [e-Shram: The Way Forward](#) [El camino a seguir para el e-Shram]. Haqdarshak.
- Roca, C., y T. Espinoza. (2020, 1º de julio). [Challenges To Protect Informal Workers Livelihoods in Peru and Mexico](#) [Desafíos para proteger los medios de subsistencia de las personas trabajadoras en empleo informal en Perú y México]. Pódcast de WIEGO sobre la economía informal: protección social, episodio 16 [material auditivo].
- Sevilla, A. y M. Sinoeun (2023). [Home-Based Workers' Access to Social Protection: Lessons Learned from the IDPoor Programme in Cambodia](#) [Acceso de las personas trabajadoras en domicilio a la protección social: lecciones aprendidas del programa IDPoor en Camboya]. Documento de consulta de WIEGO n.º 30.
- Sims, W. (2020). [The Accuracy of Proxy Means Tests for Immigrant Populations: A Case Study in Colombia](#) [La exactitud de la prueba indirecta de medios para las poblaciones inmigrantes: un estudio de caso en Colombia]. *Journal of Public & International Affairs*.
- UNCTAD. (2021). [Data Protection and Privacy Legislation Worldwide](#) [Legislación mundial sobre protección de datos y privacidad]. [Material interactivo].
- Wagner, B., y C. Ferro (2020). [Data Protection for Social Protection: Key Issues for Low- and Middle-Income Countries](#) [Protección de datos para la protección social: asuntos cruciales para los países de renta baja y media]. Berlín: Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ).
- Wang, R. Y., y D.M. Strong (1996). [Beyond Accuracy: what data quality means to data consumers](#) [Más allá de la exactitud: lo que significa la calidad de los datos para los consumidores de datos]. *Journal of Management Information Systems*, 12 (4), pp. 5-33.
- WIEGO (2021). [COVID-19 Crisis and the Informal Economy in Tiruppur, India: Lasting Impacts and an Agenda for Recovery](#) [La crisis de la COVID-19 y la economía informal en Tiruppur, India: repercusiones duraderas y programa de recuperación]. Mánchester: WIEGO.

Acerca de WIEGO

Mujeres en Empleo Informal: Globalizando y Organizando (WIEGO, por su sigla en inglés) es una red mundial dedicada a promover el empoderamiento de las personas trabajadoras –particularmente de las mujeres– en situación de pobreza en la economía informal para garantizar sus medios de sustento. Creemos que todas las personas trabajadoras deben tener los mismos derechos, oportunidades económicas y protecciones, y poder expresarse en un plano de igualdad. Para promover el cambio, WIEGO contribuye con el mejoramiento de las estadísticas, la construcción de nuevos conocimientos sobre la economía informal, el fortalecimiento de redes de organizaciones de personas trabajadoras en empleo informal, así como de sus capacidades; y, junto con estas redes y organizaciones, busca influir en las políticas locales, nacionales e internacionales. Visite www.wiego.org/es.

